



10 de octubre de 2019

Sra. Marisa Kelly

Presidenta de la Universidad de Suffolk

Universidad de Suffolk

8 Ashburton Place

Boston, MA 02108-2770

Estimada Presidenta Kelly,

Nosotros, en Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB), una ONG con sede en DC, le escribimos para plantear nuestra preocupación por las acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos en Bahrein, supervisadas por el jeque Abdullah bin Rashid bin Abdullah AlKhalifa, embajador de Bahrein en los Estados Unidos. El embajador AlKhalifa visitó la Universidad de Suffolk a principios de este mes para hablar de las relaciones entre Estados Unidos y Bahréin, y supuestamente destacó el "respeto a la libertad religiosa" en el reino, a pesar de la bien documentada discriminación de Bahréin contra su población de mayoría chiíta. Nos preocupa que su compromiso con su prestigiosa universidad sea un esfuerzo por encubrir el deficiente historial de derechos humanos de Bahréin. Por tanto, pedimos a la Universidad de Suffolk que rechace todas las visitas futuras del jeque Abdullah bin Rashid bin Abdullah AlKhalifa.

El embajador AlKhalifa es un miembro de la familia gobernante AlKhalifa de Bahréin, hijo del ministro del Interior, el jeque Rashid bin Abdullah AlKhalifa, que también ha sido acusado de supervisar los abusos contra los derechos humanos en Bahréin. Antes de ocupar el cargo de embajador, el jeque Abdullah bin Rashid bin Abdullah AlKhalifa ocupó múltiples cargos, entre ellos el de gobernador de la Gobernación del Sur de Bahréin entre 2010 y 2017; presidente de la Federación Asiática de Fisicoculturismo y Fitness; y vicepresidente de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness desde 2008. El embajador AlKhalifa ha utilizado estos cargos para ganar protagonismo mientras permitía a sus subordinados atacar y detener arbitrariamente a defensores de los derechos humanos y someter a los detenidos y presos a torturas y malos tratos.

Mientras ocupaba el cargo de gobernador de la Gobernación del Sur de Bahréin, el embajador AlKhalifa supervisó algunos de los centros de detención de Bahréin, incluidas las comisarías de policía de Riffa Este y Oeste, donde activistas, periodistas y defensores de los derechos



humanos, como [Nabeel Rajab, Mohammed Ramadan, Nazeeha Saeed y Mahmood Abdulsahib](#), fueron detenidos arbitrariamente y denunciaron torturas, malos tratos y denegación de atención médica. La Gobernación del Sur también tiene autoridad sobre la tristemente célebre prisión de Jau, que sufre un grave hacinamiento y que en 2017 implementó el encadenamiento de los presos para las citas médicas, lo que Human Rights Watch ha [denunciado](#) como un trato inhumano y degradante que viola el derecho internacional. El embajador Al Khalifa también ocupó este cargo en marzo de 2015, cuando las fuerzas de seguridad y los guardias de la prisión supuestamente [utilizaron](#) gases lacrimógenos, perdigones y palizas en respuesta a los disturbios en la prisión. En las semanas siguientes, los presos denunciaron castigos colectivos y torturas desenfrenadas por parte de los guardias, como obligar a los reclusos a dormir en el patio de la prisión durante varias semanas, rociarlos con agua fría, someterlos a levantamientos forzados e insultos sectarios y privarlos de comida y sueño.

Además de los centros de detención y las prisiones, los funcionarios de la Gobernación del Sur cometieron violaciones de derechos humanos en otros lugares durante el mandato del embajador Al Khalifa como gobernador, incluido el hospital de las Fuerzas de Defensa de Bahréin. Durante las manifestaciones de 2011, el hospital de las Fuerzas de Defensa de Bahréin se utilizó para maltratar, amenazar e intimidar a personas que habían resultado heridas en las protestas y que buscaban tratamiento médico. Los detenidos [denunciaron](#) que se les llevó al hospital de las Fuerzas de Defensa, pero que se les negó la atención médica y que, en cambio, se les golpeó, se les esposó, se les vendaron los ojos y se les torturó antes de trasladarlos a centros de detención o a prisiones. Varias personas denunciaron haber recibido amenazas de agresión sexual contra ellas mismas y sus familias, y al menos un detenido denunció haber recibido amenazas de muerte.

Además, el Gran Premio de Fórmula 1 se celebra en Sakhir, Bahréin, en la Gobernación del Sur. Las autoridades bahreiníes han aplicado violentamente restricciones a la libertad de reunión y han atacado manifestaciones pacíficas. En abril de 2013, por ejemplo, las fuerzas de seguridad [detuvieron](#) a las activistas Rihanna al Mosawi y Nafeesa al Asfoor acusadas de "intentar colocar un artefacto explosivo en el circuito de Fórmula 1" después de que planearan organizar una protesta pacífica en la zona. Ambas denunciaron que fueron amenazadas y sometidas a malos tratos bajo custodia; al-Mosawi alegó que la despojaron de su ropa y la golpearon. Ambas fueron encarceladas y, aunque finalmente fueron [indultadas](#) en 2015 (al-Asfoor) y 2016 (al-Mosawi), las denuncias de malos tratos nunca fueron investigadas adecuadamente por el gobierno. Los activistas también [acusan habitualmente](#) al gobierno de utilizar el evento de Fórmula 1 como medio clave para "blanquear" el historial de derechos humanos de Bahréin en la escena internacional, y [denuncian](#) que los abusos contra los derechos humanos aumentan en torno al evento debido a la represión de las protestas.



El embajador AlKhalifa también fue presidente de la Federación Asiática de Fisicoculturismo y Fitness (AFBF) y vicepresidente de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBF) durante 2011, cuando las autoridades bahreiníes llevaron a cabo una campaña de represalias contra los atletas de Bahréin por su participación en las protestas prodemocráticas. En 2011, las autoridades bahreiníes detuvieron y supuestamente torturaron a [Tariq Al-Farasani](#), campeón de culturismo de Bahréin y de Asia. A pesar de su papel como jefe de estas federaciones, el jeque Abdullah no intervino en el caso. Tariq fue detenido durante dos meses y luego [condenado](#) a un año de prisión en el Tribunal de Seguridad Nacional, que utiliza la justicia militar para juzgar a los civiles que participan en las manifestaciones.

El embajador AlKhalifa ha utilizado sus diversos cargos de poder y autoridad, así como su condición de miembro de la familia gobernante, para proteger a sus subordinados y proporcionarles impunidad por la tortura y los malos tratos a los presos políticos y los defensores de los derechos humanos. Este no es el tipo de individuo que debería ser acogido por la Universidad de Suffolk en ninguna capacidad. Por lo tanto, le pedimos que, en su calidad de presidente de la Universidad de Suffolk, rechace todas las futuras visitas del jeque Abdullah bin Rashid bin Abdullah AlKhalifa y de todos los demás funcionarios bahreiníes que estén implicados en abusos de los derechos humanos o los supervisen.

Atentamente,

Husain Abdulla

Director Ejecutivo

Americanos por la Democracia y los Derechos Humanos en Bahréin (ADHRB)